

BOGOTÁ (31 de mayo de 2023) - La trata de personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales sigue socavando la consolidación de la paz en Colombia, advirtió hoy una experta de la ONU.

«La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos, una violación del derecho internacional humanitario y un delito grave que socava la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social», dijo Siobhán Mullally, Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños en una [declaración](#) tras una visita de nueve días a Colombia.

La experta celebró el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad, pero dijo que este compromiso debe aplicarse en la práctica en toda Colombia, en particular en las zonas rurales. También celebró el compromiso del Gobierno para dar una respuesta a la trata de personas basada en los derechos humanos y a la expansión de una migración segura, regular y ordenada, e instó a las autoridades a incluir el tema de la trata de personas en la Política de Paz del país.

«La trata de personas es cometida por grupos armados no estatales y organizaciones criminales para apoyar sus actividades y controlar a las comunidades. Afecta especialmente a las comunidades afrocolombianas y rurales, a los pueblos indígenas y a los y las migrantes venezolanos», afirmó Mullally.

«Es imperativo que la trata de personas forme parte de las discusiones de la Política de Paz de Colombia y que se implemente y fortalezca el capítulo étnico del Acuerdo Final para prevenir la trata, asistir y proteger a las víctimas, desarrollar programas centrados en los y las sobrevivientes y diseñados por ellos, así como medidas para combatir la impunidad», dijo. «El compromiso con una reforma rural integral, y con la promoción de los derechos de las mujeres rurales y las comunidades rurales es bienvenido, y esencial para la prevención de la trata de personas.»

«Las medidas de protección deben ser a largo plazo y contar con todos los recursos necesarios», afirmó la experta.

Mullally afirmó que los desplazamientos relacionados con los conflictos contribuyen a aumentar el riesgo de trata de personas debido a la pérdida de medios de subsistencia, la pérdida de alojamiento y la ruptura de las redes comunitarias y familiares.

«Los niños, niñas y adolescentes son los más afectados y el aumento del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados en los últimos años es motivo de grave

preocupación», afirmó la Relatora Especial. «El gobierno debe avanzar urgentemente en la adopción de medidas para impedir el reclutamiento y la utilización de todos los menores de 18 años, especialmente en las zonas de conflicto», añadió.

Las mujeres y las niñas, en particular, están expuestas a la trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados y redes criminales, dijo Mullally.

La Relatora Especial también elogió a las autoridades colombianas por el Estatus de Protección Temporal concedido a los venezolanos, más de un millón de los cuales han cruzado a Colombia.

Instó al Gobierno a abordar los retrasos en el acceso a la documentación y la obtención del estatuto de protección, especialmente por parte de los y las migrantes en zonas remotas.

Dada la condición de Colombia como país de tránsito para los y las migrantes, Mullally instó a las autoridades a prestar especial atención a los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus familias, especialmente en las zonas fronterizas y en los puntos de tránsito, donde su exposición a los riesgos de la trata es aguda y donde los servicios son limitados.

«Se necesitan urgentemente medidas de alojamiento seguro y de protección, en particular en las zonas afectadas por el conflicto y en las zonas rurales donde viven comunidades afrocolombianas, indígenas y comunidades afectadas por la migración», dijo la experta de la ONU.

«Las autoridades territoriales están infrafinanciadas y no disponen de recursos presupuestarios ni humanos para asistir a las víctimas. En ausencia de asistencia y protección, las víctimas son vulnerables a la revictimización», añadió Mullally.

Durante su visita, la Relatora Especial se reunió con supervivientes y víctimas de la trata y con defensores y defensoras de los derechos humanos. Su visita la llevó a la capital, Bogotá, y a Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales.

La experta de la ONU pidió una acción coordinada de las autoridades colombianas para garantizar investigaciones eficaces sobre la trata de personas. Instó al Gobierno a aumentar la presencia de autoridades civiles en las zonas afectadas por la violencia de los grupos armados, ampliar el despliegue y la capacidad territorial de la Fiscalía General de la Nación e implementar medidas para responder con prontitud a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

«Debe garantizarse el acceso a reparaciones para las víctimas de la trata relacionada con el conflicto, para todos los fines de explotación, incluidos el reclutamiento forzado, el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual y la esclavitud sexual, el trabajo forzado, la servidumbre doméstica y la criminalidad forzada», dijo la experta.

FIN

Siobhán Mullally (Irlanda) fue nombrada [Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños](#), por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2020, para promover la prevención de la trata de personas en todas sus formas y fomentar medidas para defender y proteger los derechos humanos de las víctimas. También es Profesora Titular de Derecho de los Derechos Humanos y Directora del Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Antes de su nombramiento como Relatora Especial, fue miembro del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), elegida Presidenta del GRETA de 2016 a 2018 y Vicepresidenta 1ª de 2014 a 2018.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como [Procedimientos Especiales](#) del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Para más información y **solicitudes de los medios de comunicación**, póngase en contacto con Sra. Clara Pascual de Vargas (clara.pascualdevargas@un.org)

Para **consultas de los medios de comunicación** relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha ([dharisha.indraguptha@un.org](mailto:धारिशा.इन्द्रगुप्ता@un.org))

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en [Twitter: @UN_SPExperts](https://twitter.com/UN_SPExperts)

¿Te preocupa el mundo en que vivimos?

Pues levántate hoy mismo por los derechos de alguien.

#Standup4humanrights

y visita la página web en <http://www.standup4humanrights.org>

Colombia: UN expert calls for effective protection of victims of trafficking

BOGOTA (31 May 2023) - Trafficking in persons, especially children by non-state armed groups and criminal organisations continues to undermine peacebuilding in Colombia, a UN expert warned today.

“Trafficking in persons is a serious human rights violation, a violation of international humanitarian law, and a serious crime that undermines peacebuilding, sustainable development and social justice,” said Siobhán Mullally, UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children in a [statement](#) following a nine-day visit to Colombia.

The expert welcomed the Government's commitment to protecting the rights of victims and combating impunity but said this commitment must be implemented in practice throughout Colombia, particularly in rural areas. She also welcomed the Government's commitment to a human rights-based response to trafficking in persons and to expanding safe, regular and orderly migration, and urged authorities to include the issue of trafficking in persons in the country's Peace Policy.

"Trafficking in persons is committed by non-state armed groups and criminal organisations to support their activities and control communities. It especially impacts Afro-Colombian and rural communities, indigenous peoples and Venezuelan migrants," Mullally said.

"It is imperative that trafficking in persons is part of Colombia's Peace Policy discussions and that the ethnic chapter of the Final Agreement is implemented and strengthened to prevent trafficking, assist and protect victims, develop survivor-centred and survivor-led programmes, and measures to combat impunity," she said. "The commitment to comprehensive rural reform, and to promoting the rights of rural women and rural communities is welcome, and essential to prevention of trafficking in persons."

"Protection measures should be long-term, and fully resourced," the expert said.

Mullally said conflict related displacement contributed to increased risks of trafficking in persons due to loss of livelihoods, loss of shelter and a breakdown of community and family networks.

"Children are most affected and an increase in recruitment and use of children by armed groups in recent years is a serious concern," the Special Rapporteur said. "The Government must urgently progress measures to prevent recruitment and use of all children under the age of 18, especially in conflict areas," she said.

Women and girls in particular, are exposed to trafficking for the purposes of sexual exploitation by armed groups and criminal networks, Mullally said.

The Special Rapporteur also commended Colombian authorities for the Temporary Protection Status granted to Venezuelans, over a million of whom have crossed into Colombia.

She urged the Government to address delays in accessing documentation and securing protection status, especially by migrants in remote areas.

Since Colombia is a transit country for migrants, Mullally urged authorities to pay particular

attention to unaccompanied and separated children, especially in border areas and in transit points where their exposure to risks of trafficking is acute and where services are limited.

“Safe accommodation and protection measures, particularly in conflict affected and rural areas among Afro-Colombian, indigenous communities and communities affected by migration, are urgently needed,” the UN expert said.

“Territorial authorities are underfunded and do not have budgetary or human resources to assist victims. In the absence of assistance and protection, victims are vulnerable to revictimisation,” Mullally added.

During her visit, the Special Rapporteur met with survivors and victims of trafficking and with human rights defenders. Her visit took her to the capital Bogota, and to Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto and Ipiales.

The UN expert called for coordinated action by Colombian authorities to ensure effective investigations into human trafficking. She urged the Government to increase the presence of civilian authorities in areas affected by armed group violence, expand deployment and territorial capacity of the Attorney General’s Office, and implement measures to promptly respond to early warnings.

“Access to reparations for victims of conflict-related trafficking, for all purposes of exploitation, including forced recruitment, recruitment and use of children, sexual exploitation and sexual slavery, forced labour, domestic servitude and forced criminality must be ensured,” the expert said.

ENDS

Ms. Siobhán Mullally (Ireland) was appointed as [Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children](#) by the UN Human Rights Council in July 2020, to promote the prevention of trafficking in persons in all its forms, and to encourage measures to uphold and protect the human rights of victims. She is also the Established Professor of Human Rights Law and Director of the Irish Centre for Human Rights at the School of Law, National University of Ireland, Galway. Prior to her appointment as Special Rapporteur, she was a member of the Council of Europe Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), elected as President of GRETA from 2016-2018 and as 1st Vice-President from 2014-2018.

The Special Rapporteurs are part of what is known as the [Special Procedures](#) of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council's independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

*For more information and **media requests**, please contact: Ms Clara Pascual de Vargas (cpascualdevargas@ohchr.org)*

*For **media inquiries** related to other UN independent experts please contact Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) or Dharisha Indraguptha ([dharisha.indraguptha@un.org](mailto:धारिशा.इन्द्रगुप्ता@un.org))*

Follow news related to the UN's independent human rights experts on Twitter: [@UN_SPExperts](#).

Concerned about the world we live in?

Then STAND UP for someone's rights today.

#Standup4humanrights

and visit the web page at <http://www.standup4humanrights.org>